

XXXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES.  
REPRESENTATIVIDAD Y LEGITIMIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA  
SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ELECTORALES

MESA: ESTUDIOS DE GÉNERO

**Brecha de género en el financiamiento de campañas: elecciones locales del 2018 y 2021  
en México**

Autoría: Vanessa Góngora Cervantes y César Vladimir Martínez Arango,  
Depto. Estudios Políticos y de Gobierno, Universidad de Guanajuato, México

**Resumen**

En México hay una amplia legislación electoral de paridad de género, con especial énfasis en la igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres accedan al mismo número de candidaturas y en espacios competitivos. No obstante, estudios cualitativos y cuantitativos dan cuenta de creencias y prácticas que reproducen discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres dentro de los partidos que inciden en la persistencia de las brechas de género en los cargos públicos. En estudios previos, desarrollados por quienes presentamos esta propuesta, se analizaron los ingresos y gastos de campaña de las candidaturas de presidencia municipal de cuatro entidades federativas mexicanas en las elecciones del 2018 (Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Yucatán), encontrando una sorprendente brecha de género del capital económico de las mujeres candidatas y su incidencia en resultados electorales no favorables.

En esta propuesta ampliamos la investigación para analizar una variable institucional en los comicios del 2021: se estableció una cuota de género en el financiamiento para campañas de 60/40. Las preguntas que orientan la investigación son: ¿Cómo se distribuyeron los ingresos y ejercieron los gastos de campañas electorales a presidencias municipales en las entidades seleccionadas en el 2018 y 2021? ¿Cuáles son los principales rubros de financiamiento de campaña de mujeres y cuáles de hombres en ambos comicios? ¿Qué cambios en el financiamiento de campaña de los partidos y colaciones se observan a partir de la aplicación de la restricción 60/40? ¿Cuál es la repercusión de la medida 60/40 en los resultados electorales? Se trataron las bases de datos de fiscalización del INE para analizar las elecciones a alcaldías de Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Yucatán en los comicios 2018 y 2021, con el propósito de identificar el impacto de la restricción 60/40 en el financiamiento público y en el número de candidaturas electas de las mujeres. La principal conclusión es que aumentó considerablemente el financiamiento de campañas de mujeres en los últimos comicios gracias a la cuota de género en el financiamiento electoral de 60/40, por medio de la compensación realizada desde los comités centrales partidistas, aunque se mantuvieron los porcentajes de apoyo de militantes, simpatizantes e ingresos de las propias candidatas. Sin embargo, no constituyó un factor determinante para aumentar el número de mujeres electas como alcaldesas de las cuatro entidades federativas.

## Planteamiento del problema

Las últimas tres décadas han sido relevantes para el adelanto de la democracia paritaria en México y en el mundo, en gran parte como consecuencia del feminismo institucional internacional que, por medio de la celebración de importantes cumbres y convenciones,<sup>1</sup> promovió como eje prioritario el incremento de número de mujeres en posiciones de poder, su postulación en cargos de elección popular y demás formas de participación democrática de los Estados Parte. Los principales avances se han registrado en los parlamentos nacionales. De acuerdo con los datos de la Unión Interparlamentaria (IPU por sus siglas en inglés) al 1 de junio del 2023, se registraron 11,859 representantes parlamentarias mujeres en el mundo, equivalente al 26.6% del total de representantes en ambas cámaras, siendo América el continente con mayor representación de mujeres con el 34.8%. México se posicionó en el cuarto lugar del ranking de mujeres parlamentarias (en la cámara de diputados y senadores), en seguida de Ruanda, Cuba y Nicaragua.

En contraste, los cargos ejecutivos siguen siendo un reto mundial: de acuerdo a datos proporcionados por IPU y ONU-Mujeres, en el 2023 hay 17 jefas de estado y 19 jefas de gobierno de 151 y 193 países, respectivamente. En México ninguna mujer ha ocupado el ejecutivo federal hasta el momento, pero obtuvo el lugar 26° del ranking de mujeres con cargos ministeriales realizado por la IPU y ONU-Mujeres, con el 42.1% de secretarías en el gabinete presidencial, porcentaje derivado en gran medida de la reforma constitucional de paridad en todo.<sup>2</sup> Las brechas de desigualdad de género en cargos ejecutivos subnacionales y locales siguen siendo un reto, a pesar de los grandes avances de la paridad en México. Las medidas de paridad han incidido paulatinamente en el aumento del número de gobernadoras: de 1957 al 2020 sólo contábamos con 14 gobernadoras; en el 2023, 10 mujeres encabezan ejecutivos estatales, incluyendo la capital del país y el Estado de México, que concentran el mayor número de habitantes del país. Asimismo, se ha elevado el porcentaje de mujeres en presidencias municipales de un 3.55% en el 2005 a un 22.18% en el 2021 pero sigue siendo un número que no cumple la expectativa paritaria.

Esta brecha de género en los cargos ejecutivos puede ser explicada por la percepción del selectorado partidista que considera que las mujeres no tienen suficiente “capital político” para postularse para un cargo ejecutivo, siendo percibidas como un riesgo electoral o una opción poco viable. Esta función de *gatekeeper* de los partidos (Cheng & Tavits, 2011) también ha obstaculizado la inclusión de mujeres en posiciones de poder al interior de los mismos. De esta forma, se cae en un círculo vicioso: sin mujeres en los espacios de toma de decisiones, no se evalúa su liderazgo, lo cual refuerza la idea de que no cuentan con un perfil idóneo para cargos ejecutivos de elección popular. Por el contrario, al haber más mujeres en estos espacios de toma de decisión partidista, éstas adquirirán más recursos que las posicionan como líderes políticas y, de esta forma, fortalecerán sus trayectorias políticas de cara a las elecciones.

El principio de paridad de género exige la superación de los obstáculos socioculturales que impiden a las mujeres ser vistas como candidatas viables para ocupar cargos de liderazgo de la más alta jerarquía. La teoría del capital político (Alcántara, 2017; Joignant, 2012)

---

<sup>1</sup> La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres celebrada en 1979, la Declaración de Atenas de 1992 y la IV Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing de 1995, por mencionar algunos de los más importantes.

<sup>2</sup> Cabe mencionar que la conformación inicial del gobierno del actual presidente de México fue paritario (ocho mujeres y ocho hombres), pero en el 2019 se institucionalizó esta decisión cuando se aprobó “la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo” o paridad transversal...”. (Vázquez-Correa, 2019)

considera relevante para el fortalecimiento de trayectorias políticas la experiencia adquirida en labores cotidianas de militancia (know-how), en posiciones de liderazgo partidista (capital político oligárquico) además de la experiencia en cargos, pues permite adquirir destrezas, conformar alianzas e integrar grupos de simpatizantes, que se transforman en apoyo económico y de movilización del voto cuando se aspira a una carrera política. Sin embargo, la persistencia de una cultura partidista sexista impide que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones que los hombres a los cargos de toma de decisiones, y de esta forma, fortalecer su capital político y económico.

En el 2018 iniciamos una investigación sobre violencia política electoral en razón de género en el Estado de Guanajuato (Góngora-Cervantes, Vázquez-Piña, y Flores-Márquez, 2020). Uno de los hallazgos no considerados en el planteamiento del problema original, fue encontrar violencia económica de los partidos contra sus propias candidatas a las alcaldías, al negarles o restringir el financiamiento para llevar a cabo sus campañas electorales. Motivados por esta observación, se realizaron otros estudios ampliando la observación a cuatro entidades federativas del mismo proceso electoral (Martínez-Arango y Góngora-Cervantes, 2019) (Góngora-Cervantes y Martínez-Arango, 2022). Ahí reforzamos la observación de que, aun cuando los partidos políticos cumplieron las disposiciones nacionales y estatales en materia de paridad – específicamente los bloques de competitividad para la distribución paritaria de candidaturas, dimensión horizontal – el financiamiento asignado a los hombres superó por mucho el asignado a las mujeres: en Guanajuato y Coahuila era más del doble, en Jalisco el triple, y en Yucatán, cinco veces más. En esa investigación concluimos que

la postulación paritaria de las candidaturas no es suficiente si sus propios partidos políticos no les proporcionan condiciones equitativas de competencia en cuanto a recursos económicos y humanos. La desigualdad económica, en este sentido, constituye una importante desventaja para las mujeres que contienden por cargos políticos, y las puede obligar a valerse de recursos propios, de movilización de capital familiar y de amistades muchas veces limitado, y si el resultado no es favorable, les puede acarrear endeudamiento o llevar a la quiebra. (Góngora-Cervantes & Martínez-Arango, 2022, pág. 184)

Sabemos que esta enorme brecha de desigualdad de género en el financiamiento de campañas electorales no pasó desapercibida por el Instituto Nacional Electoral (INE) de México. El 28 de octubre del 2020 se tomó el Acuerdo INE/CG517/2929 por el que fueron emitidos *los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*. Además de estipular importantes medidas como la 3 de 3 de contra la violencia de género,<sup>3</sup> la fracción XIV del artículo 14, estableció: “En el caso del financiamiento no podrá otorgarse a las mujeres menos del 40% del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña. El mismo porcentaje se aplicaría para el acceso a los tiempos en radio y televisión en periodo electoral.” Se trata de una cuota de género en el ejercicio del financiamiento público con el objetivo de aminorar la brecha de género, presumiendo que mayores recursos se traducen en más mujeres electas. Esta medida que sorpresivamente ha pasado desapercibida por los medios de comunicación y la academia se aplicó en las elecciones locales del 2021 y otras posteriores. Dados nuestros antecedentes de

---

<sup>3</sup> Se refiere a la necesidad de que los aspirantes no puedan registrarse como candidatos si fueron condenados o sancionados por: 1) violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; 2) por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; como persona deudora alimentaria o morosa que atenten contra las obligaciones alimentarias. La conocida 3 de 3 contra la violencia de género se incorporó en la Constitución mexicana en mayo del 2023, estableciendo la suspensión de los derechos para trabajar en el gobierno o contender por un cargo de elección popular en el caso de entrar en alguna de las tres causales.

investigación, la autora y autor de esta ponencia no dudamos en la pertinencia de comparar la distribución del financiamiento público de esos comicios con los analizados previamente.

En este sentido, las preguntas de investigación de esta propuesta son: ¿Cómo se distribuyeron los ingresos de campañas electorales entre candidatas y candidatos a alcaldías de Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Yucatán en las elecciones de 2018 y 2021? ¿Cuáles son los principales rubros de ingreso de las mujeres y de los hombres en ambas elecciones? ¿Cuál es el impacto de la cuota de género 60/40 del financiamiento electoral en las victorias electorales de las mujeres? A partir del análisis las bases de datos de fiscalización de los procesos electorales de INE 2018 y 2021 identificamos los montos de ingresos y gastos por candidaturas de mujeres y hombres (posibles brechas de género). Los datos desagregados por sexo se analizan por entidad federativa y por candidaturas electas y no electas, con el propósito de identificar la eficacia de la cuota 60/40 en la disminución de las brechas de género de financiamiento público y victorias electorales.

### **Aparato crítico**

Hay consenso académico en considerar el dinero como un factor muy relevante en democracia, para solventar gastos administrativos cotidianos de los partidos, para posicionarse en los procesos internos de los partidos políticos en la postulación de candidaturas y para tener una campaña competitiva: “el dinero es el combustible de la política partidaria. Como combustible, no determina qué partes ganan la carrera, pero definitivamente ayuda a seguir corriendo constantemente” (Haughton referido por Casal, Molenaar, Piccio y Rashkova, 2014, pág. 356). El problema que se presenta es que la necesidad de recursos se puede resolver con el apoyo de actores económicos cuya intervención devalúa las elecciones, como explican Casas y Zovatto (2010, p. 49), “[c]uando el poder político simplemente es un espejo del poder económico, el principio de ‘una persona, un voto’ pierde su significado”. También está la tentación constante de los líderes políticos de aceptar apoyos más allá de los mecanismos legales, como el sentido problema en la región latinoamericana de la intervención del crimen organizado con apoyo monetario, de especie o intimidación a los contrincantes políticos especialmente, pero no exclusivamente, en el nivel subnacional y local. Ambos casos orientan a los Estados a formular restricciones de apoyo privado a los partidos políticos y transparentar sus cuentas para evitar la corrupción y cooptación delictiva.

Además de los riesgos de sujeción a los intereses de quienes tienen más riqueza y de grupos criminales, también está el problema de la desigualdad en la distribución del financiamiento político. En primer lugar, no se dan condiciones de competitividad electoral cuando algunos partidos políticos no tienen las mismas oportunidades de difundir sus propuestas con el electorado frente a otros partidos con mayores privilegios. Pero además de la posible desigualdad entre partidos, se debe reconocer la desigualdad intrapartidaria, en la que se favorecen grupos internos y se marginaliza a otros (Acuña, Piñero y Rossel, 2018), como es el caso de las poblaciones históricamente vulnerables, como las mujeres:

La política no solo está dominada por los ricos, sino que también está dominada por los hombres. Esto no es coincidencia; en todo el mundo, los hombres tienen más dinero, influencia y poder que las mujeres. Las brechas de género en los recursos hacen que sea más fácil para los hombres que para las mujeres financiar sus propias campañas para cargos públicos y postularse como candidatos, lo que contribuye a la sobrerrepresentación mundial de hombres en cargos públicos. Los hombres también están en una posición más fuerte para contribuir financieramente a las campañas de otras personas (Murray, Muriaas, & Wang, 2023, pág. 4).

La discusión legal y politológica se orienta a la revisión de las ventajas y desventajas de los regímenes de financiamiento privado, público y mixto y la forma en que interactúan con el sistema electoral, especialmente los principios de representación política. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos puede ser emblemático del financiamiento privado; las y los candidatos tienen mayor protagonismo, por lo que recaudarán sus fondos valiéndose del apoyo de militantes y simpatizantes, de redes de donatarios o de recursos familiares o propios, más que de los recursos de los partidos políticos. La desventaja del financiamiento privado, además de la mencionada la presión que pueden ejercer los donatarios poderosos en la toma de decisiones de las personas electas, es precisamente la desventaja inicial de algunas personas que les impide postularse a candidaturas o sostener sus campañas de forma competitiva, de manera que los partidos políticos apoyan a aquellos que consideran sujetos solventables y políticamente viables.

El financiamiento público es la aplicación de un conjunto de normas para que los partidos políticos accedan a fondos estatales ya sea para sus actividades ordinarias, para realizar acciones específicas de promoción cívica y/o para enfrentar los procesos electorales. De esta manera, son relevantes en este régimen las restricciones a la recaudación monetaria, aunque si el margen superior es alto, las medidas no tienen impacto, y si los montos son muy bajos, provoca que partidos y candidatos salgan en búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, como el “riesgo de infiltración de dinero proveniente del crimen organizado transnacional en las campañas y el uso indebido de los recursos del Estado para financiar actividades políticas”. (Gutiérrez y Zavatto, 2011, pág. 4)

Una de las supuestas ventajas del financiamiento público es que genera condiciones equitativas de competitividad, al interior de los partidos porque disminuye la presión por la recaudación a los y las candidatas, y entre partidos políticos, por ejemplo, garantizando una suma a los partidos de reciente creación o que no están posicionados mayoritariamente (Casal, Molenaar, Piccio, y Rashkova, 2014), y candidaturas independientes, permitiendo solventar sus gastos organizacionales y de campaña. Asimismo, el financiamiento público requiere una labor exhaustiva de fiscalización para rendición de cuentas, lo que supone tener un mayor control sobre posibles actos de corrupción, sin embargo, investigaciones como las de Casal et al. (2014) muestran que no siempre es así. Una desventaja importante es que el acceso a financiamiento público no garantiza que esos recursos se distribuyan equitativamente entre candidaturas, pues la decisión se toma de manera generalmente de manera centralizada, por élites partidistas dominadas por intereses particulares.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) construye una *Base de Datos de Financiamiento Público* de 180 países actualizada constantemente. De acuerdo con la información generada por esta base, 111 países tienen disposiciones sobre financiamiento público, en tiempos electorales y no electorales, 14 países solo para tiempos electorales, esto hace que una gran mayoría de países cuentan con financiamiento público, pues sólo 51 no tiene fondos públicos para este propósito. Sesenta y cuatro países establecen límites en los montos de donatarios físicos y/o morales (por ejemplo, empresariales); en 55 países la restricción del monto de donatarios es específicamente en el momento electoral. En 53 países se establece un monto máximo de autofinanciamiento de las y los candidatos.

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, los países latinoamericanos han ido incorporando medidas de financiamiento público, para adoptar regímenes mixtos, “es decir, en el que los partidos reciben tanto fondos públicos como privados, y la mayoría cuenta con subvenciones públicas directas (en dinero o bonos) o indirectas (facilidades en cuanto a servicios, infraestructura, beneficios tributarios, acceso a medios de comunicación,

capacitación, transporte, incentivos para el ejercicio ciudadano del voto, etc.)” (García, 2004, pág. 147). En México, se incorporaron medidas de apoyo estatal para actividades partidistas desde 1977, como parte de las reformas electorales que promovían la competitividad electoral, como la inclusión del principio de representación proporcional. En 1985 se reglamenta el financiamiento público a partidos, pero hasta 1996 se establece la preeminencia de este financiamiento sobre el privado en la Constitución (Córdova, 2011). El financiamiento público directo se puede destinar a actividades electorales y partidarias y para acciones de formación y capacitación de cuadros, investigación y educación cívica, mientras que el financiamiento público indirecto se refiere al acceso gratuito a medios de comunicación principalmente en tiempos electorales.

Una gran mayoría de los textos académicos revisados para esta ponencia expresan en sus primeras líneas la advertencia de que el financiamiento político con perspectiva de género es un campo de investigación poco explorado en la Ciencia Política. En el momento de elaboración del texto no podemos sostener lo mismo, pues la revisión de literatura es lo suficientemente basta para analizar experiencias en prácticamente todo el mundo y con información que data de la década de los noventa, para estudios longitudinales relevantes. La revista *International Political Science Review* acaba de publicar en el 2023 un número especial, *Gender and political financing*, abordando casos nacionales de todo el mundo: Corea del Sur, Italia, Reino Unido, Israel, Irlanda, Cabo Verde y Ghana. En cada uno de los artículos se hace una revisión exhaustiva del estado del arte, que ya se había realizado en otros países de Europa y Estados Unidos, y es posible identificar referentes principales que dan consistencia al aparato crítico del tema.

En América Latina, existe un creciente esfuerzo por analizar el financiamiento político de las mujeres derivado de la implementación de las cuotas o paridad de género en los sistemas electorales. Cabe resaltar la labor del *Observatorio de Reformas Políticas en América Latina* – y el Caribe que tiene una línea abierta de investigación sobre la recaudación y financiamiento electoral, teniendo como producto un estudio comparativo de la región realizado por Betilde Muñoz-Pogossian y Flavia Freidenberg en el 2022. Como la tradición en América Latina ha sido el financiamiento público, las funciones estatales de fiscalización permiten contar con bases de datos de todos los procesos electorales, nacionales y subnacionales, por lo que no será extraño ver cada vez más estudios relacionados con este tema.

El aparato crítico del tema se ha centrado en la perspectiva institucional, encontrando relación entre variables del sistema electoral y el tipo de régimen de financiamiento (privado o predominantemente público) y los obstáculos estructurales y partidistas que las mujeres sortean para acceder al poder político. Julie Ballington (2003) explica que hay dos momentos clave para mujeres, cuando el dinero es muy relevante: cuando se aspira a una candidatura - precampaña o elecciones primarias - y cuando planean y desarrollan las campañas políticas.

Para ellas hay mayores complicaciones de recaudación de fondos en el primer momento relacionadas con el sistema electoral, de modo que, si se eligen representantes por mayoría relativa, como es el caso de algunos cargos ejecutivos, o congresistas de distritos uninominales, las mujeres tienen barreras de entrada desde la postulación. De acuerdo con esta autora las barreras pueden ser: 1) psicosociológicas, porque sacan a flote roles estereotipados de género que provocan una percepción o autopercepción de poca capacidad de las mujeres para recaudar dinero; 2) limitado acceso a redes de apoyo de organizaciones donatarias importantes, empresariales y profesionales, y de apoyo de los liderazgos de partidos políticos; y 3) el alto costo de la postulación para las aspirantes a una candidatura, que es complicado que puedan solventar, a no ser que provengan de una “dinastía política” o de una clase económica solvente. Se debe reconocer la desigualdad estructural de género evidenciada en la brecha salarial, la

discriminación sexual y violencia laboral y política en razón de género (Casas-Zamora & Falguera, 2017), así como las responsabilidades adjudicadas tradicionalmente a las mujeres (Buckley & Mariani, 2023), cuidado y labores domésticas que representan un costo extra para que alguien más las realice, que los hombres generalmente no asumen. El acceso a dinero anticipado para la postulación es muy relevante para que las mujeres puedan franquear esas barreras.

Este problema se acentúa cuando el régimen de financiamiento es predominantemente privado pues la responsabilidad de la recaudación recae directamente en las candidatas.<sup>4</sup> Por ejemplo, se ha encontrado una brecha de género amplia entre el financiamiento de donatarios individuales entre mujeres democráticas y republicanas de EUA, y apoyo más favorable a las candidatas del Partido Demócrata (Crespin y Deitz, 2010). Mientras que las organizaciones que donan más recursos suelen ser inversionistas cuya motivación es la protección de sus intereses económicos, la gran mayoría de personas (físicas) que donan tienen como objetivo influir en la composición del Congreso por causas sociales o políticas (coincide el caso de Canadá mencionado por (Feo, Fiorelli, & Piccio, 2023). Siendo la igualdad de género una causa social muy relevante en las últimas décadas, se comprende que una importante cantidad de donantes individuales apoye a las candidatas mujeres, sabiendo su situación de desventaja dentro de los partidos, es decir, la condición de género se vuelve un recurso para la recaudación de dinero.

Entonces, la orientación ideológica de los partidos se vuelve otra variable relevante, pues los partidos conservadores o de derecha están asociados con mayor naturalidad a los intereses corporativos, mientras que los partidos de izquierda, presuntamente defensores de ideas más progresistas reciben donaciones más pequeñas de personas convencidas por las causas. Crespin y Deitz (2010) advierten que la dependencia de las recaudaciones individuales hace más exhaustivo el trabajo de búsqueda de donantes para las candidatas, que sus pares hombres quienes tienen el apoyo de donatarios de grandes cantidades de dinero o el apoyo del partido político. Habría que analizar si este patrón de mayor número donatarios individuales que apoyan a las mujeres se observa también en regímenes de financiamiento predominantemente público. Aunque autoras como Murray, Muriaas y Wang (2023) se toman con mayor precaución la relación del financiamiento con la orientación ideológica partidista, pues consideran que no se ha encontrado aún una relación contundente en los estudios realizados hasta el momento.

El caso de Italia estudiado por Feo, Fiorelly y Piccio (2023) es interesante, pues el país transitó recientemente (de 1994 al 2018) de un régimen de financiamiento público a uno predominantemente privado, transformación que se pensó tendría un impacto negativo en las aspiraciones políticas de las mujeres por sus limitaciones al acceso a apoyo privado, a pesar de la implementación de cuotas de género en el sistema electoral. En dicha pesquisa se confirma que los candidatos varones tienen como principales donantes a entidades corporativas y empresas, mientras que las mujeres tienen una red más equilibrada entre dichas corporaciones, profesionistas y lazos familiares. No obstante, se encontró que el monto promedio de las donaciones es muy similar entre mujeres y hombres, debido a que aquellas que sí reciben donaciones importantes tienen experiencia en el cargo, igual que los hombres. Se concluye que la experiencia partidista y en cargos de elección popular (capital político) es una variable con mayor peso que el sexo que incide en la capacidad recaudatoria de fondos privados. Independientemente del género:

---

<sup>4</sup> Cabe mencionar que en el financiamiento público también se presentan obstáculos para las mujeres en los procesos internos de selección de candidaturas: “[e]ste es el punto en el que las mujeres se encuentran en desventaja, pues cuentan con menos recursos económicos personales y el apoyo a sus candidaturas, al parecer, continúa siendo resistido” en las cúpulas de poder partidistas (Bareiro, Soto, & Soto, 2007).

[l]os contribuyentes tienden a apoyar las personas en candidaturas que han ocupado cargos parlamentarios o de liderazgo anteriores porque sienten que tienen más conocimientos y competencia, tienen una red institucional más sólida y tienen la capacidad de dar forma a los sectores de políticas en los que han estado trabajando durante su mandato anterior. Las grandes donaciones, por lo tanto, se dirigen hacia aquellos candidatos que se espera que desarrollen políticas efectivas, para que los donatarios puedan contar con personas con experiencia en el cargo.” (Feo, Fiorelli, y Piccio, 2023, pág. 46)

Casas y Falguera (2017) coinciden con la anterior investigación, pues su estudio sobre financiamiento político de mujeres en Colombia. aunque es un régimen predominantemente público - también indica que la experiencia en cargos públicos aumenta la capacidad financiera de las mujeres candidatas, debido a que actores económicos, empresariales y sociopolíticas amplias se acercan orgánicamente a ellas durante su mandato, lo que les permite tener “grandes cofres de guerra de fondos de campaña” y una amplia red de donatarios para financiarlas (Buckley y Mariani, 2023, pág. 62).

En resumen, hay una coincidencia en la literatura sobre financiamiento y género (Ballington, 2003; Murray, Muriaas, & Wang, 2023; Muñoz-Poggosian y Freidenberg, 2022) que considera como los principales obstáculos de acceso a recursos de las mujeres: la desigualdad estructural salarial y laboral, el costo asociado con el trabajo doméstico y de cuidado que implica la subcontratación del trabajo doméstico, la violencia política que viven, sobre todo, el cuestionamiento de su competencia, y las limitaciones a las redes de apoyo y renuencia de los donatarios de apoyar a las mujeres, específicamente sin trayectoria política.

Las barreras de entrada para las mujeres se aminoran cuando las candidaturas están centradas en las decisiones de los partidos políticos y acciones afirmativas de igualdad de género, como las cuotas. Se sabe que el principio de representación proporcional ha sido favorable para la igualdad de género en la representación política, principalmente por la inclusión del mandato de posición de género en las listas de partidos, generalmente de zipper o alternancia de sexo de postulaciones de candidaturas: “el mandato de posición será más efectivo entre mayor sea el tamaño de la circunscripción plurinominal, dado que cada asiento adicional disponible disminuye la competencia interna de las postulaciones” (Góngora-Cervantes y Martínez-Arango, 2022, pág. 142) y ello facilita el acceso de las mujeres a las candidaturas. Se ha encontrado que el sistema de representación proporcional, al controlar las postulaciones de candidaturas, obliga a los partidos a responder mejor las presiones políticas para incluir a más mujeres (Palma y Cerva, 2014).

Relacionado con lo anterior, es preciso decir que el grado de centralización de las decisiones partidistas también es un factor importante del financiamiento de mujeres, pues si la estructura es fuertemente centralizada las decisiones sobre la distribución de recursos las tomarán los comités directivos nacionales; pero si es una estructura partidista descentralizada, se da entrada a más agentes partidistas y locales en la decisión de distribución de los recursos. Por ejemplo, Acuña, Piñero y Rossel (2018) explican que las elecciones de Uruguay son fuertemente centralizadas pues cuentan con la figura de elecciones “vinculantes a nivel de lema” que significa que el electorado sólo puede seleccionar el bloque partidista para todos los cargos de elección popular que se postulan, es decir, no puede hacer un voto diferenciado. Si la centralización nacional de decisiones favorece la aplicación de normas y lineamientos de género, quiere decir que la descentralización puede ser un escenario de mayor resistencia para la inclusión de mujeres en candidaturas.

En el momento electoral, cuando las mujeres ya son candidatas, la recaudación de fondos es muy importante para pagar las campañas electorales, principalmente para el posicionamiento



con el electorado por medio de la propaganda en los medios de comunicación. Los estudios empíricos que hemos referido han encontrado que las barreras de género de recaudación de fondos para campaña son más marcadas en los sistemas electorales centrados en los candidatos, pues en estos recae dicha responsabilidad (Ballington, 2003). Pero en sistemas electorales con fuerte incidencia partidista, el financiamiento en campaña es reflejo de las dinámicas partidistas y las relaciones de poder entre grupos internos: “A la vez, las lógicas de recaudación y ejecución de gasto tienden a reforzar los patrones políticos y organizativos que les dieron vida. En otras palabras, las formas de organizar el financiamiento electoral son un factor explicativo de la distribución de poder dentro de los partidos y las fracciones” (Acuña, Piñero y Rossel, 2018, pág. 61). Como sostiene Daniela Cerva (2014), los partidos políticos, con dirigencias históricamente masculinas, son organizaciones generizadas con una cultura patriarcal enraizada, que no han sido aliados en la lucha por la igualdad de género, más bien se han resistido y tratado de eludir las normas de igualdad de género de manera reiterada.

### *Medidas para la igualdad de género en el financiamiento político*

En función de las barreras de financiamiento que las mujeres tienen, referidas en líneas anteriores, y como parte de las medidas especiales a favor de la igualdad de género, se han implementado mecanismos para emparejar el piso de los recursos para mujeres aspirantes y candidatas. Citando a Ohman, Muñoz-Poggosian y Freidenberg (2022, pág. 22) definen como financiamiento con enfoque de género aquellos mecanismos en “los que la elegibilidad de un partido político para recibir parte o el total de su financiamiento público, o la cantidad (asignación) de fondos públicos que recibe un partido político elegible, está vinculada a disposiciones relacionadas con el género, o cuando parte de la financiación pública está destinada a fines relacionadas con género.”

El mecanismo más común y aceptado, pero de impacto indirecto y a largo plazo, es destinar un porcentaje de financiamiento público para que los partidos desarrollen actividades relacionadas con la capacitación y la promoción del liderazgo político de las mujeres. Este es el principal instrumento que se utiliza en los países latinoamericanos, iniciando con Costa Rica (Londoño, 2016), pero que actualmente quince países en el mundo, siete de América Latina establecen en su normatividad electoral destinar recursos para este propósito (IDEA Internacional, 2022). Sin embargo, esta acción afirmativa tiene un impacto indirecto y a largo plazo, no inmediato en los procesos electorales en los que se inscriben las candidatas. Para que funcione la medida es necesario que los partidos políticos realmente orienten el presupuesto a actividades útiles para la formación y estrategia político-electoral de las mujeres, aunque algunas investigaciones han dado cuenta de la simulación en que estas organizaciones caen, como parte de su resistencia al cambio. La capacitación en búsqueda de recursos y formación de redes de apoyo, tendría que ser una acción prioritaria financiada por estos recursos

Considerando las propuestas de Ballington (2003) y (Muñoz-Poggosian y Freidenberg, 2022) se distinguen cuatro vías o mecanismos de financiamiento con enfoque de género, además de los recursos para capacitación y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres: 1) la restricción de límites en el gasto en las precampañas y campañas; 2) el financiamiento anticipado de redes de mujeres para aspirantes a candidaturas; 3) incentivar con financiamiento extra a los partidos políticos que aumenten el número de mujeres candidatas; y 4) Incluir costos de cuidado como gastos personales de precampaña o campaña. El primero, implementado principalmente en regímenes de financiamiento privado, es imponer límites de gasto tanto en las elecciones internas de partido como en las campañas, sin embargo, se ha detectado que esto puede ser sumamente contraproducente para las mujeres pues ellas requieren gastar más que los candidatos varones para vencer la desigualdad estructural de género. También limitar el

número de donaciones tendría un impacto negativo para ellas pues, como ya lo hemos visto, las mujeres reciben más donaciones individuales, aunque de menor cantidad, frente a las grandes donaciones de agentes corporativos que los hombres reciben.

En segundo lugar, para vencer las barreras de entrada en las primarias o precampañas en regímenes de financiamiento privado, una medida ampliamente conocida es la organización de redes de donatarias para financiar a mujeres aspirantes a candidaturas de cargos públicos, esto es, proporcionar dinero “anticipado” para garantizar su inclusión como candidatas. En Estados Unidos destacan los comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), la más importante, sin duda, es *Emily's List*, que apoya económicamente a mujeres del Partido Demócrata que se manifiesta de manera abierta a favor del aborto y que se fundó desde 1985. El acrónimo significa *Early Money Is Like Yeast* [dinero oportuno es como la levadura]: hace que la masa suba, (Ballington, 2003), haciendo referencia a la importancia de que las aspirantes que comulgan con sus propósitos encuentren el soporte económico en la etapa de postulación, para que puedan ser candidatas posteriormente. Con este mismo objetivo se fundó en 1992 la *Wish List* pero para apoyar a las mujeres republicanas; y en contraparte, el siguiente año se fundó la *Susan B. Anthony List* para apoyar a candidatas que no están de acuerdo con el aborto.

En regímenes de financiamiento predominantemente público, un tercer mecanismo con enfoque de género para promover la igualdad en el acceso a recursos, es vincular parte de este financiamiento público con el cumplimiento de las normas de igualdad de género. De acuerdo con la Base de Datos de Financiamiento Político, 29 países en el mundo condicionan los recursos públicos de los partidos al cumplimiento de las cuotas de género. Arcos (2018) y Ballington (2003) mencionan los casos de Francia y Portugal como ejemplos de incentivos negativos para promover la paridad de género, por medio de la sanción de perder financiamiento público de no cumplir con un mayor número de candidaturas de mujeres. Este sería también el caso de México. Por otro lado, Colombia y Chile establecen también el incentivo en su normatividad, pero positivo, de manera que dan un financiamiento “plus” cuando demuestran resultados en el aumento de mujeres candidatas y electas. Sin embargo, estos mecanismos no inciden directamente en los recursos que los partidos políticos destinan a las candidatas, sino que son medidas para asegurar el cumplimiento de las cuotas o paridad de género.

Finalmente, destacan algunas medidas orientadas a reconocer las desventajas de género en los costos de oportunidad al participar en contiendas electorales, principalmente los costos de cuidado en los gastos de elección. (Ballington, 2003), por ejemplo, Canadá incluye los gastos de cuidado como gastos personales que pueden ser financiados por el financiamiento público. Sin embargo, esta medida no es una práctica tan socorrida actualmente.

Una perspectiva diferente es considerar las cuotas de género como el mecanismo para incentivar que los partidos políticos den mayor financiamiento a las candidatas. El estudio de Buckley y Mariani (2023) parte de la pregunta de investigación sobre cuál es el impacto de las cuotas de género en la distribución del financiamiento electoral basado en los partidos, analizando el caso de Irlanda, concretamente: “¿las cuotas nivelan el campo de juego financiero para las mujeres candidatas? ¿Responden los partidos a las cuotas aumentando el apoyo a las mujeres candidatas o redoblando sus esfuerzos para proteger a los hombres de partido arraigados? ¿Están las candidatas en mejores condiciones para aprovechar los fondos de campaña para ganar votos bajo un sistema de cuotas?” (Buckley y Mariani, 2023, pág. 60). Al hacer una comparación de elecciones previas y posteriores a la ley de cuotas de género (70/30), las autoras encuentran que la cuota de género tuvo un impacto positivo para las mujeres en la distribución de los recursos para campaña:

En las elecciones anteriores a la cuota de género, las candidatas recibieron una quinta parte de la inversión total del partido en candidaturas, aproximadamente similar a la

proporción de mujeres presentadas por los partidos. Con la cuota vigente en 2016, la mitad de los gastos de los partidos se dedicaron a las mujeres (que representaron el 32,8 % de todos los candidatos presentados por los partidos) (Buckley y Mariani, 2023, pág. 66).

Particularmente sorprende a las autoras los resultados que muestran que se destinaron más recursos a las mujeres que tenían menos experiencia previa (medido con la variable años en cargos locales y legislativos) que sus homólogos hombres, contrariando la evidencia de los estudios mencionados líneas arriba que explicaron la desconfianza de donatarios y partidos políticos a personas sin trayectoria política o experiencia en cargos. Una explicación a esto, proporcionada por las propias autoras, es que puede tratarse de una estrategia a largo plazo de los líderes del partido, una especie de inversión pragmática en las militantes “recién llegadas” por la cuota de género, para promover su posicionamiento y experiencia política.

Esta conclusión difiere directamente con nuestros resultados de la investigación, pues no encontramos este tipo de comportamiento en los partidos políticos de México, quienes se han resistido a la implementación de las cuotas de género y, después, a las disposiciones para garantizar el principio de igualdad de género, destinando una menor cantidad de recursos a las mujeres aun cuando representan el 50% de las candidaturas, hasta que se estableció una restricción al respecto.

En esta investigación, estableceremos un quinto mecanismo para promover la igualdad de género: el establecimiento de una cuota de género en el financiamiento directo e indirecto destinado a campañas electorales. Casas-Zamora y Falguera rescataron el testimonio de una senadora de Colombia que sostenía:

Si tuviera que elegir una reforma institucional para facilitar el acceso de las mujeres al poder, sería establecer cuotas de financiación para las mujeres, tanto un porcentaje de los recursos de campañas como de los recursos de funcionamiento de los partidos. Si tuviera que escoger entre dos diseños institucionales, uno con 30% de mujeres en listas y cero dinero y otro de cero cuotas en las listas pero con el 30% de los recursos para financiar mujeres, escogería el dinero. El dinero te dará el cupo en la lista, pero el cupo en la lista no te da el dinero. (Casas-Zamora y Falguera, 2017, pág. 33)

Este mecanismo es aplicado en México y Brasil. Llama la atención a la autora y autor de esta ponencia, que en el estudio de Muñoz-Poggosian y Freidenberg (2022) se menciona, en una nota al pie de página, la restricción en México de no destinar menos del 40% de los recursos para las campañas políticas a las candidatas mujeres, así como la misma proporción de los tiempos de medios de comunicación, establecida por el INE en los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género* publicados en el 2020 para aplicación en los comicios del siguiente año. Sobre todo, sorprende que no se le considere como otro mecanismo de financiamiento con perspectiva de género, cuando en la tabla 1 de “reglas electorales respecto a financiamiento político con perspectiva de género en América Latina” (p. 36), sí aparece el caso de Brasil que se estipula que el financiamiento en campañas de las mujeres no puede ser menor al 30% del total de cada partido, en correspondencia a la cuota electoral del mismo porcentaje.

Esta medida se deriva, seguramente, de la gran brecha de género observada por la academia y los organismos electorales en estas dos experiencias nacionales. En México estudios como los nuestros, mencionados en el aparatado del planteamiento de esta ponencia, evidenciaron que las normas de paridad de género no eran correspondidas con una distribución igualitaria de los recursos de campaña. Angélica Mendieta (2020) analizó las elecciones de 2018 de diputaciones federales, encontrando una gran brecha de género a favor de los hombres

en la distribución de los recursos: “las mujeres recibieron un 37.66 por ciento del financiamiento, mientras que los hombres recibieron el 62.34 por ciento” (pág. 109). De acuerdo a la tabla 1 de este estudio (p.110), las mujeres tienen un mayor porcentaje de ingresos en los conceptos de autofinanciamiento y transferencias de candidatos federales de representación proporcional, pero constituye una cantidad ínfima, mientras que lo respectivo a transferencias de recursos locales, que es el mayor ingreso, representa el 38.1% de ingreso para ellas. Ahora bien, esta investigación reporta diferencias entre los partidos políticos en la distribución del financiamiento para mujeres y hombres: Morena prácticamente lo distribuye paritariamente, mientras que el PAN dio sólo el 24.72% del financiamiento a sus candidatas mujeres, estos resultados serían relativamente congruentes con lo mostrado en la literatura sobre la orientación ideológica de los partidos. Un estudio a nivel subnacional es el de Carolina Durán y Antonio López (2019), quienes analizaron los comicios del Estado de México en el 2018, si bien encuentran una diferencia mínima en cuanto a los ingresos entre mujeres y hombres (ligeramente mayor para ellos en todos los partidos políticos y coaliciones), encuentran una brecha relevante en el financiamiento privado observando que los candidatos reciben más del 69% de las aportaciones de simpatizantes y 60% de transferencias en especie.

### **Análisis y conclusiones preliminares**

En México, los financiamientos de campaña (así como los de los partidos políticos en general) tienen un esquema de participación público y privado en donde el primero debe prevalecer sobre el segundo; esto se establece en el numeral 2 del artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). También en esta misma ley, en el inciso b) del numeral 1 del Artículo 51 apartados I a III, establece los montos de financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos para gastos de campaña y que corresponden al cincuenta por ciento más de su financiamiento público ordinario si en la elección se renuevan tanto poder ejecutivo como legislativo y, treinta por ciento si solamente se renueva el poder ejecutivo. Además, cabe resaltar que este mismo inciso, en su apartado III, establece que el financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos. En cuanto al financiamiento privado, el Artículo 53 de la LGPP determina las modalidades de las que puede provenir: financiamiento por la militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y, financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

En esta investigación se realizó un análisis comparado de los ingresos de campaña para la elección de presidencias municipales en dos procesos electorales locales ordinarios (2017-2018 y 2020-2021) de cuatro entidades federativas mexicanas: Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Yucatán. La información proviene de las bases de datos que se encuentran en el *Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización* del Instituto Nacional Electoral. Una vez descargadas las bases de fiscalización de ambos procesos electorales se aplicaron tratamientos pertinentes que derivaron en una sola base de datos con la información necesaria y suficiente para el análisis que se hizo. A manera general e informativa, se describen los tratamientos realizados:

1. Para ambos procesos electorales, se descargaron dos bases: una que reporta operaciones de ingresos y gastos en general y, otra que desglosa los ingresos por rubro. Se extrajeron campos específicos para conformar una nueva base que abarcara todos los registros únicos (candidaturas) con los campos necesarios para explotarla (dado que había campos de interés diferentes en ambas tablas). Esta nueva base creada para cada uno de los procesos electorales quedó restringida únicamente a candidaturas de presidencias municipales en los cuatro estados de interés.

2. Los campos que desglosan los rubros de los ingresos en cada proceso electoral son diferentes, por lo que hubo que aplicar tratamientos de homologación de nombres de campos, así como de agrupamientos de campos para hacer equivalencias (se sumaron los ingresos de las transferencias en especie, recursos federales y recursos locales del 2018 para equipararlas con el rubro de transferencias de concentradoras del 2021) y, omisión de algunos del proceso 2020-2021 porque no se están considerados en el proceso anterior (diferencias por prorrateo, operativos de la campaña, propaganda y propaganda utilitaria), pero que no afectan porque se reportaron con ceros en la tabla que sí los considera.
3. A la nueva base de datos de fiscalización se le agregó un campo que identifica cuales candidaturas resultaron electas en las dos elecciones para todos los municipios de las cuatro entidades y de esta manera poder cuantificar los ingresos destinados a las campañas ganadoras.

Encontramos una variación porcentual del 59% entre los ingresos de campaña totales de las dos elecciones a alcaldías analizadas (2018 y 2021) para las cuatro entidades seleccionadas. Este incremento general deriva de incrementos de cualquier agrupamiento que consideremos, en particular, para el desglose de los ingresos de campañas por sexo y para el desglose de candidaturas electas.

Tabla 1. Ingresos de campaña desagregados por sexo, de las elecciones a alcaldías de Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, 2018 y 2021

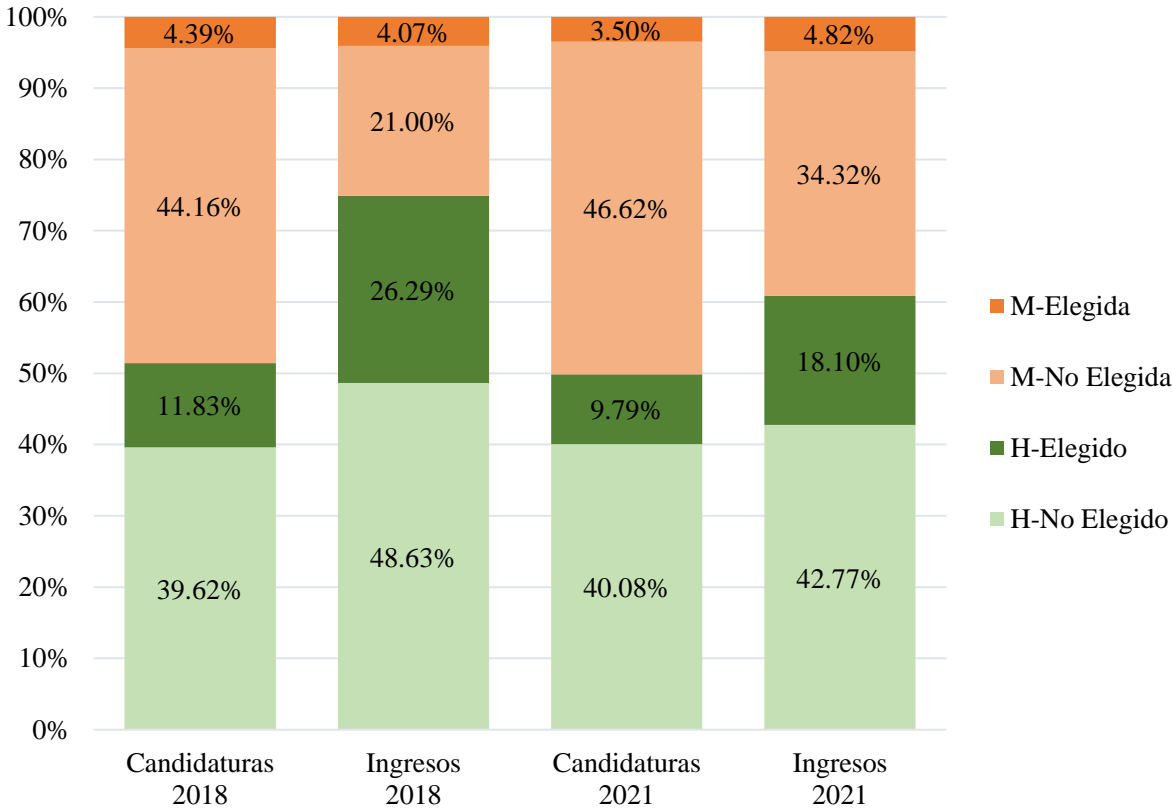
Resultado/Sexo	2017-2018		2020-2021		Variación porcentual
	Ingreso	% Ingreso	Ingreso	% Ingreso	
<b>Candidaturas totales</b>	<b>\$ 201,460,041.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 320,419,759.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>59.0%</b>
<b>Brecha</b>		<b>49.84%</b>		<b>21.73%</b>	
H	\$ 150,937,372.70	74.92%	\$ 195,023,641.89	60.87%	29.2%
M	\$ 50,522,668.66	25.08%	\$ 125,396,117.75	39.13%	148.2%
<b>Candidaturas electas</b>	<b>\$ 61,178,036.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 73,433,853.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.0%</b>
<b>Brecha</b>		<b>73.16%</b>		<b>57.94%</b>	
H	\$ 52,968,695.34	86.58%	\$ 57,990,830.48	78.97%	9.5%
M	\$ 8,209,340.90	13.42%	\$ 15,443,022.87	21.03%	88.1%
<b>Candidaturas no electas</b>	<b>\$ 140,282,005.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 246,985,906.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.1%</b>
<b>Brecha</b>		<b>39.67%</b>		<b>10.96%</b>	
H	\$ 97,968,677.36	69.84%	\$ 137,032,811.41	55.48%	39.9%
M	\$ 42,313,327.76	30.16%	\$ 109,953,094.88	44.52%	159.9%

La tabla 1 muestra que, si bien hay un incremento general de los ingresos para campañas que se explica principalmente por el crecimiento presupuestal anual que tienen los partidos políticos aunado con la inflación, el incremento en los ingresos para campaña de las mujeres presenta un sorprendente crecimiento del 148.2% que no se debe exclusivamente a la misma razón. Es precisamente este el impacto de la cuota de género 60/40 establecida en los lineamientos del INE, esto es, que la restricción a los partidos políticos de no proporcionar menos del 40% de los ingresos para campañas, la cual, si bien no está contenida en la Constitución, Ley de Partidos Políticos o Ley de Instituciones o Procedimientos Electorales, todo indica que los partidos políticos decidieron acatar. De esta manera, las mujeres recibieron el 25.08% de los ingresos para campaña en las elecciones del 2018 a recibir un 39.13% en el 2021.

La acción afirmativa de la cuota 60/40 redujo de manera global la brecha de género en la asignación de ingresos de campaña en un 28.11%, pasando de 49.84% a 21.73%. Esta misma tendencia se observa para las candidaturas no electas que pasaron de tener una brecha de 39.67% en el 2018 a una de 10.96% en el 2021, reduciendo la distancia entre hombres y mujeres en un 28.71%. No obstante, para el grupo de candidaturas que resultaron electas no tuvo el mismo impacto, la reducción brecha fue de 15.22%, pasando de 73.16% a 57.94%. Nótese que este grupo en particular es donde más acentuada está la brecha de género.

Una manera gráfica de ver el impacto que la cuota 60/40 tuvo en las candidaturas y su distribución de ingresos para campañas se presenta en la Gráfica 1, la cual muestra la distribución porcentual tanto de candidaturas como de los ingresos para campaña por sexo y tipo de candidatura.

Gráfica 1. Porcentaje de candidaturas para presidencia municipal e ingresos de campaña de Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, elecciones 2018 y 2021

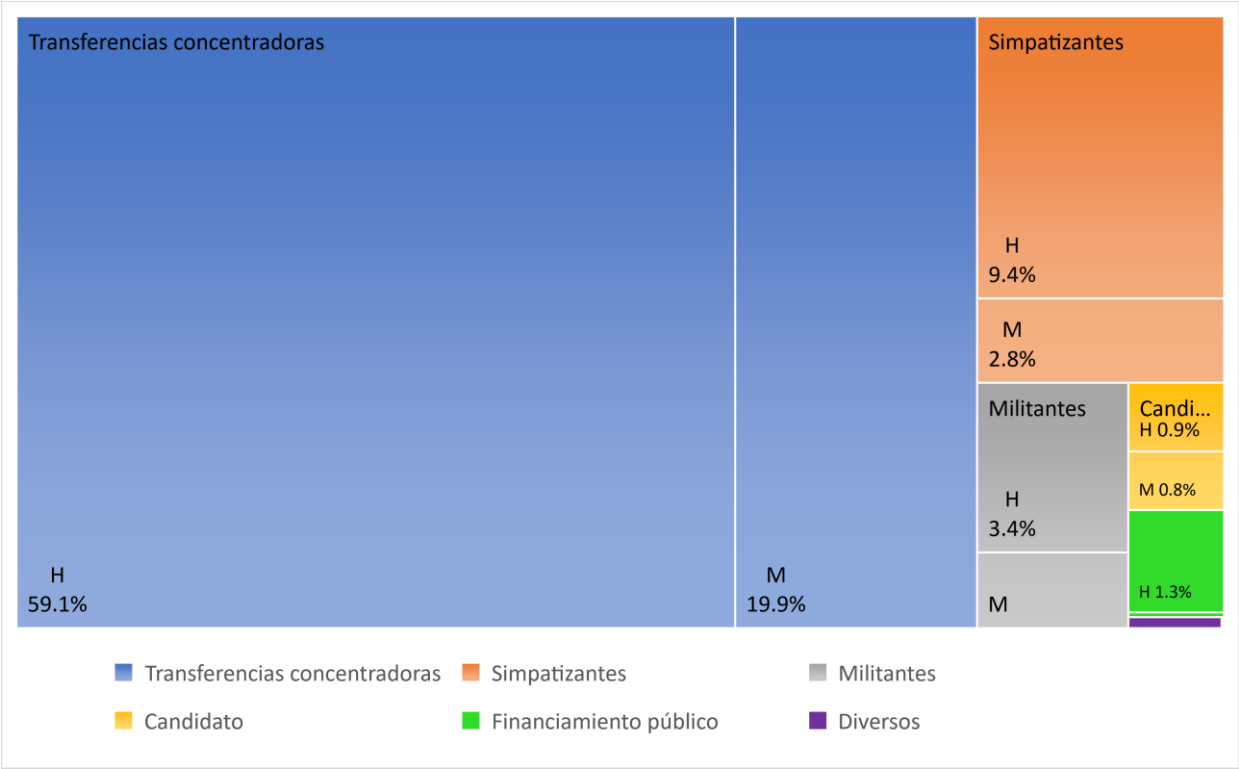


De este gráfico se desprenden dos observaciones importantes. En primer lugar, se evidencia la sujeción de los partidos políticos a las normas electorales en materia de género; en ambos comicios, 2018 y 2021, se cumple la paridad de mujeres y de hombres en las candidaturas a las presidencias municipales para las cuatro entidades federativas seleccionadas. Además, mientras que en las elecciones 2018, la mitad de las candidaturas correspondiente a las mujeres recibieron sólo el 25.04% del financiamiento para sus campañas, en las elecciones 2021, el financiamiento se aproximó al 40% establecido en los lineamientos del INE (39.14%). La segunda observación reafirma los señalamientos anteriores: el cumplimiento de la cuota 60/40 no se traduce en un mayor número de mujeres electas presidentas municipales en estos estados del país, sólo el 4.39% ganaron en el 2018 e incluso bajó a un 3.5% en el 2021, mientras que el financiamiento de campañas de los partidos políticos y coaliciones para este grupo de

candidatas se mantuvo prácticamente igual, 4.07% en 2018 y 4.82% en 2021. Desde este punto de vista, el incremento al financiamiento de campaña de las mujeres no tuvo un impacto real que resultara en más posiciones para ellas, de hecho, en el gráfico se puede apreciar que el incremento de los ingresos para campañas se va mayoritariamente para el grupo de candidaturas de mujeres que no son electas, pasando del 21% en 2018 al 34.32% en 2021. Este incremento se amortiguó casi de manera equitativa por la reducción de los ingresos para los dos grupos de hombres candidatos, los elegidos y los no elegidos, donde, para el primer grupo, su financiamiento se redujo en un 8.19% mientras que para el segundo en un 5.86%.

Del incremento en el financiamiento de candidaturas de mujeres en las elecciones de presidencias municipales para las cuatro entidades federativas seleccionadas, resulta importante analizar si todos los rubros que forman parte del ingreso para campañas tienen ese comportamiento, es decir, es relevante saber si el incremento del 14.05% que tuvo el ingreso de las mujeres es el resultado de un aumento en cada uno de los rubros que lo conforman. Para ello se presentan los gráficos 2 y 3 donde se muestra con áreas de colores la aportación que cada rubro hace al ingreso para campañas según el porcentaje que le corresponde a cada sexo en cada uno de los dos procesos electorales analizados.

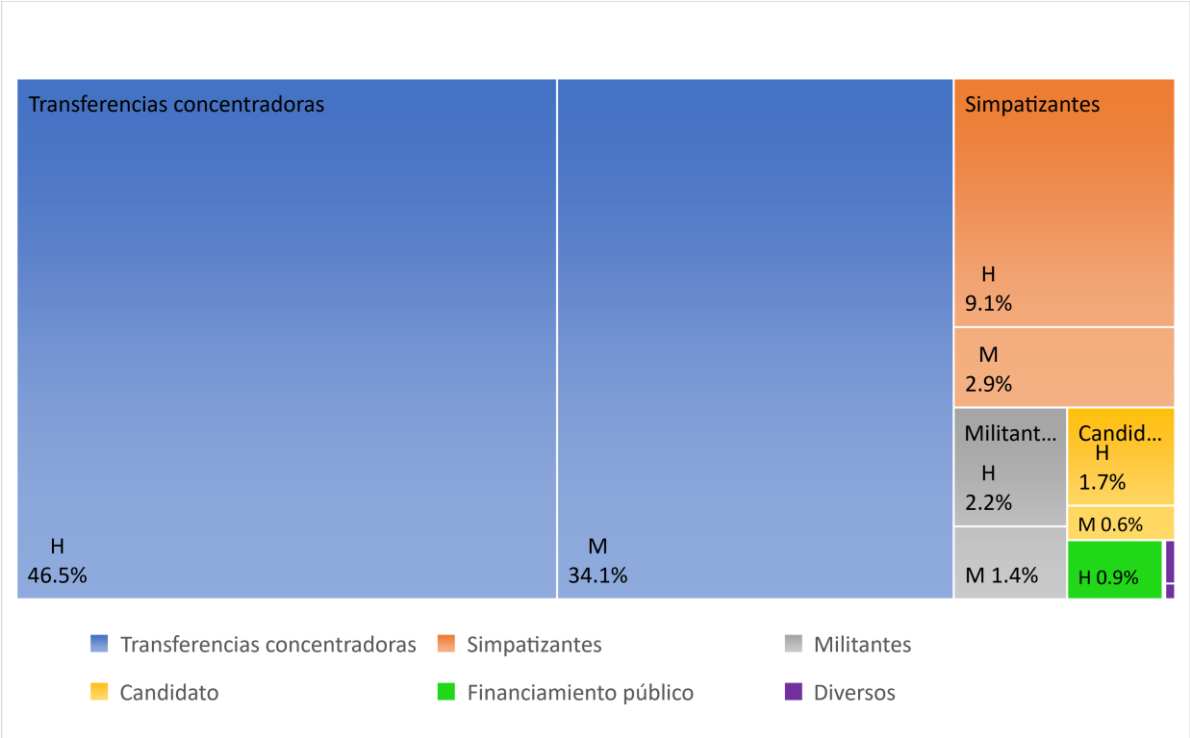
Gráfico 2. Rubros de ingresos de campaña de las elecciones a alcaldías de Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, 2018



El gráfico 2 y el 3 muestran que todos los rubros (excepto el de transferencias concentradoras) mantienen una proporción de áreas semejantes en ambos procesos electorales. Esto significa que el ajuste en el incremento del financiamiento a las campañas de las mujeres en las elecciones de presidencias municipales de las cuatro entidades seleccionadas está auspiciado prácticamente por las transferencias concentradoras que equivalen básicamente al financiamiento público; éstas engloban a los ingresos por transferencias en especie, las transferencias de recursos federales y a las transferencias de recursos locales. El financiamiento

privado brindado por simpatizantes, militantes, los mismos candidatos y candidatas, el autofinanciamiento, los rendimientos bancarios, rendimientos financieros, fondos y fideicomisos se mantiene más o menos con el mismo comportamiento.

Gráfico 3. Rubros de ingresos de campaña de las elecciones a alcaldías de Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, 2021



La situación anterior hace preguntarnos si las acciones afirmativas aplicadas están teniendo el efecto esperado, es decir, es evidente que hay una mejoría y un avance en cuanto a paridad, ya no solo de las postulaciones en las candidaturas, sino también de los financiamientos de campaña (aunque aún falta un 10% para alcanzarla), No obstante, por una parte estas reducciones de brechas no se están materializando en los resultados de las elecciones, no hay 50 % de municipios presididos por mujeres y por otro lado, aparentemente no hay un aprendizaje al interior de los partidos políticos ni de las personas puesto que no cambian su manera de apoyar las candidaturas, no se ve reflejado una mayor aportación de militantes y simpatizantes a las candidaturas de mujeres, este cumplimiento del lineamiento se está dando gracias a los recursos públicos.

Los partidos políticos no están visualizando las acciones afirmativas de igualdad de género como una ventana de oportunidad que les permita ser más competentes y competitivos, sino más bien como un mero trámite que hay que acatar para no ser observados. Esto es lo que se vislumbra por la manera general en que distribuyen los ingresos para las campañas: se prefiere hacer un derroche que no refleja un impacto en el número de presidencias municipales ocupadas por mujeres en lugar de hacer una inversión (que es a largo plazo) que les beneficie, esto se haría fortaleciendo los perfiles de las mujeres, proponiéndolas en candidaturas de mayor oportunidad que aunado a ese incremento en el ingreso de campaña haría de esas mujeres potenciales contrincantes con mayor conocimiento, capacidad y presencia para elecciones futuras en otros cargos.



## Referencias

- Acuña, S., Piñero, R., & Rossel, C. (2018). ¿Quién maneja la caja? Financiamiento político y estructuras partidarias en Uruguay. *Colombia internacional*(95), 55-77. doi:10.7440/colombiaint95.2018.03
- Alcántara, M. (2017). La carrera política y el capital político. *Convergencia*, 73, 187-204.
- Arcos, H. S. (2018). Elecciones y financiamiento político: ¿Qué funciona, qué falla y cómo podemos mejorar la regulación del dinero en la política? *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, VII(1), 189-208.
- Arrendondo, V., Vega-Esparza, R. M., Villegas-Santillán, M. T., & Álvarez-Diez, R. C. (2021). Nueva propuesta de financiamiento público a partidos políticos en México. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVII(1), 89-98.
- Ballington, J. (2003). Gender Equality in Political Party Funding. *Workshop Is Financing an Obstacle to the Political Participation of Women? Inter-American Forum on Political Parties*. Washington DC: IDEA Internacional. Recuperado el 28 de Julio de 2023
- Bareiro, L., Soto, C., & Soto, L. (2007). *La inclusión de las mujeres en los procesos de reforma política en América Latina*. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Buckley, F., & Mariani, M. (2023). Money matters: The impact of gender quotas on campaign spending for women candidates. *International Political Science Review*, 44(1), 59-76.
- Casal, F., Molenaar, F., Piccio, D. R., & Rashkova, E. R. (2014). The world upside down: Delegitimising political finance regulation. *International Political Science Review*, 35(3), 355-375.
- Casas, K., & Zovatto, D. (2010). Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina. *Nueva Sociedad*(225), 48-67.
- Casas-Zamora, K., & Falguera, E. (2017). *Financiación política y participación equitativa de las mujeres en Colombia: análisis de la situación*. Versión electrónica: IDEA Internacional.
- Cerva, D. (2014). Participación política y violencia de género en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 59(222), 117-140. doi:10.1016/S0185-198(14)70212-0
- Cheng, C., & Tavits, M. (2011). Informal influences selecting female political candidates. *Political Research Quarterly*, 64(2), 460-471. doi:10.1177/106591209349631
- Córdova, L. (2011). El financiamiento a los partidos políticos en México. En P. Gutiérrez, & D. Zovatto, *Financiamiento de los partidos políticos en América Latina* (págs. 351-368). México: IDEA Internacional, OEA, UNAM.
- Crespin, M. H., & Deitz, J. L. (2010). If You Can't Join 'Em, Beat 'Em: The Gender Gap in Individual Donations to Congressional Candidates. *Political Research Quarterly*, 581-593.
- Durán, C., & López, A. (2019). Techos de cristal en el financiamiento de la campaña electoral de 2018 en el Estado de México. *Justicia Electoral*(23), 143-176.

- Feo, F., Fiorelli, C., & Piccio, D. (2023). Gendered patterns in candidates' campaign fundraising: The case of Italy. *International Political Science Review*, 44(1), 43-58.
- García, A. I. (2004). Financiamiento político y perspectiva de género. En S. Griner, & D. Zovatto, *De las normas a las buenas prácticas: El desafío del financiamiento político en América Latina* (págs. 143-183). San José, Costa Rica: ABC Ediciones del Sur.
- Góngora-Cervantes, V., & Martínez-Arango, C. V. (2022). Confinamiento electoral de las mujeres en la distribución de candidaturas de alcaldías en las elecciones 2018. En E. Palma, & B. Rangel, *Avances y perspectivas de la democracia paritaria en los procesos electorales locales y federales de 2018* (págs. 139-188). México: INE, Siglo XXI.
- Góngora-Cervantes, V., Vázquez-Piña, V., & Flores-Márquez, D. (2020). *Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato: análisis del proceso 2017-2018*. México: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
- Gutiérrez, P., & Zavatto, D. (2011). Balance regional: financiamiento político en América Latina 2004-2010. En P. Gutiérrez, & D. Zavatto, *Financiamiento de los partidos políticos en América Latina* (págs. 3-16). México: IDEA Internacional, OEA, UNAM.
- IDEA Internacional. (2022). *Political finance database*. Obtenido de <https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database>
- Joignant, A. (2012). Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político. *Revista Mexicana de Sociología*, 74(4), 587-618.
- Londoño, J. F. (2016). *Financiamiento público para la inclusión de mujeres en los partidos políticos en Colombia*. Bogotá: ONU-Mujeres.
- Martínez-Arango, C. V., & Góngora-Cervantes, V. (2019). Bastiones y guetos femeninos: análisis de la dimensión transversal de la paridad de género en las elecciones de alcaldías de México de 2018. En O. F. Díaz, V. Góngora-Cervantes, & M. Vilches, *Elecciones críticas de 2018: un balance de los procesos electorales federales y locales en México* (págs. 347-384). México: Grañén Porrúa, Universidad de Guanajuato.
- Mendieta-Ramírez, A. (2020). Financiamiento de las campañas políticas de 2018 en México: desigualdad de género. *Vivat Academia. Revista de comunicación*(152), 101-115.
- Muñoz-Poggosian, B., & Freidenberg, F. (2022). Estrategias de recaudación, financiamiento público para campañas electorales de mujeres y reformas partidistas en América Latina. *Elecciones*, 24, 15-67.
- Murray, R., Muriaas, R., & Wang, V. (2023). Editorial introduction: Gender and political financing. *International Political Science Review*, 44(1), 3-12.
- Palma, E., & Cerva, D. (2014). La importancia de las instituciones y la organización de las mujeres: el cumplimiento de la cuota de género en las elecciones federales mexicanas del 2012. *Política y gobierno*, 21(2), 289-323.
- Vázquez-Correa, L. (2019). Reforma constitucional de paridad de género: rutas para su implementación. *Cuaderno de investigación*(58).